



> LA FIRMA JOSÉ MIGUEL VILLARIG
PRESIDENTE DE APPA - ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES

Renovables, un sector en situación crítica

Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. Y por mucho que el Gobierno, su Ministerio de Industria y su Secretaría de Estado de Energía repitan y califiquen a la retahíla de medidas regulatorias que han puesto en marcha como reforma eléctrica no la convierten en tal. La política energética del Gobierno o, mejor dicho, la ausencia de ella ha motivado una serie de medidas, todas recaudatorias y algunas retroactivas, que han llevado al sector de las energías renovables a una situación crítica, que sólo atisba un rayo de esperanza en las políticas medioambientales europeas.

Gracias al esfuerzo público y privado el sector de las energías renovables consiguió convertirse en un modelo de éxito tomado como ejemplo tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Los datos son elocuentes. El sector cerró 2013 con una potencia instalada de 50.689 MW, lo que supuso una producción eléctrica de 113.575 GWh, siendo la principal fuente de generación eléctrica al cubrir el 41% de la demanda eléctrica. La aportación del sector al PIB español alcanzó el 1% en 2012, con una contri-

bución total de 10.563 millones de euros, con balanzas positivas tanto fiscal como comercialmente, contribuyendo a reducir nuestro déficit energético, que en 2013 alcanzó los 41.000 millones de euros.

Sin embargo, el marco regulatorio diseñado desde 2009 ha hecho que España esté perdiendo, de manera irreversible, su bien ganada posición de liderazgo mundial en el sector de las renovables y la inseguridad jurídica y el caos regulatorio en los que se encuentra inmersa han puesto al sector en una situación crítica, que pone en peligro su futuro. Todo ello porque el Gobierno ha hecho suyo el discurso de las grandes eléctricas empeñadas en mantener su oligopolio y ha identificado las primas a las energías renovables con el déficit de tarifa. Muy al contrario, el problema del déficit está en la falta de competencia del mercado eléctrico y la excesiva remuneración de las centrales nucleares y las grandes hidráulicas, denunciadas por la Comisión Europea y la antigua CNE.

Algunos datos. Las energías renovables abarataron en 2012 el precio del mercado diario de OMIE en 4.056 millones de euros, con un ahorro en el mercado diario de 18,12

euros por cada MWh adquirido. El abaratamiento neto (ahorros menos primas) acumulado en el periodo 2005-2012 fue de 5.639 millones de euros, reduciendo en esa cantidad el déficit que se podría haber generado. Por tanto, se puede afirmar con rotundidad que las renovables no han sido las causantes del déficit de tarifa.

La caída de la demanda eléctrica motivada por la crisis hizo que las compañías eléctricas tradicionales no pudieran integrar en el sistema eléctrico toda la generación de sus centrales de ciclos combinados de gas, desarrolladas por libre iniciativa empresarial en la última década hasta alcanzar más de 27.000 MW, muchos de ellos innecesarios, y que cobran una subvención del 40% a la inversión.

Asumiendo como suyos los planteamientos de los lobbies energéticos tradicionales, el Gobierno se estrenó con un primer Decreto Ley, de enero de 2012, que trajo consigo una moratoria renovable. A partir de entonces, toda la legislación en materia energética aprobada ha sido fruto de una permanente improvisación y ha tenido a las renovables como las grandes damnificadas de su reforma eléctrica.

A pesar de ello, cualquier análisis cara al futuro, tanto medioambiental como económico, apuesta por las energías renovables, por más trabas que se les quiera poner. Así lo entiende el Parlamento Europeo, que ha aprobado un objetivo del 30% de consumo de renovables de los estados miembros cara a 2030. El Gobierno español ha demostrado una vez más su falta de compromiso al apoyar la propuesta menos ambiciosa de la Comisión y que el compromiso sea global y no específico por países. Pero una cosa está clara, el sector de las energías renovables tendrá que jugar un papel fundamental en que España cumpla sus compromisos medioambientales y en la lucha contra el cambio climático. ■■■